

El espacio público porteño

Liderazgos de opinión e inteligibilidad de la agenda

Sebastián Mauro (UBA)*

En los últimos 20 años, hemos asistido a una mutación del modelo representativo, que se orienta hacia una forma personalizada, en la que los nuevos liderazgos apelan en forma directa a la opinión pública a través de los *mass media*, sin mediación de las formas agregadas de voluntades e intereses, sean partidarias, corporativas o incluso asociativas. Estos nuevos líderes interpelan a los ciudadanos como audiencia pasiva que solamente se expresa a través del sufragio o de los sondeos de opinión. ¿Cómo abordar la constitución del espacio público en un contexto en el que todos los actores y puntos de referencia sociales parecen desvanecerse? A este panorama debemos agregar una dificultad adicional: desde el “cacerolazo”, ha cobrado mayor fuerza una forma de expresión directa e inmediata de la ciudadanía, que podemos denominar “estallido” y que se caracteriza por el ejercicio de un poder de veto ciudadano (necesariamente reactivo) en la irrupción en el espacio público.

El siguiente trabajo pretende dar cuenta de esta problemática y ofrecer una clave de análisis para abordar este nuevo espacio variable y multiforme, a partir del estudio de la constitución de la agenda política, entendiendo a ésta última como la arena de conflicto en la que se constituyen actores *ad hoc* en competencia por imponer una determinada forma hermenéutica de significar la actualidad, pugna alrededor de la cual se construyen identidades políticas fluctuantes.

En este sentido, dicha estrategia se abocará a describir el tratamiento de la noción de *seguridad* en la agenda política porteña en los últimos dos años, en tres acontecimientos que movilizaron a la opinión pública y motorizaron importantes cambios en las políticas gubernamentales, mostrando las diversas definiciones que se ofrecen sobre el significativo *seguridad*, los sucesivos desplazamientos que la convierten en una cuestión crucial, que condensa diversas imágenes del ideario político argentino, que se articula con otros temas de agenda y redefine los lineamientos del debate en el espacio público. La cuestión de la *seguridad* se ha vuelto fundamental para dotar de sentido a la realidad

* Licenciado en Ciencia Política (UBA). Becario del equipo “Las nuevas formas políticas”, Instituto Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA).

y para constituir identidades colectivas, que se ponen en juego en cada posicionamiento que se asume alrededor de los problemas de coyuntura.

Del pueblo a la audiencia: transformaciones en el espacio público

En Argentina, puede afirmarse que la dinámica política actual está signada por una crisis de representación, en tanto fenómenos tales como el abstencionismo registrado en el ciclo electoral 2001 o como el “cacerolazo” producido en diciembre de ese mismo año demuestra un claro cuestionamiento del mismo lazo representativo. Aunque el ciclo inaugurado en 2003 pareciera indicar una vuelta a la normalidad, la crisis permanece como posibilidad latente (Cheresky, 2004).

Más allá de esta coyuntura, es posible rastrear numerosas transformaciones en el modelo representativo desde 1983, paralelas a los cambios políticos en el resto de Latinoamérica y en las democracias más institucionalizadas. El nuevo formato representativo se caracteriza por la fluidez de la construcción de la oferta política y por la fluctuación del comportamiento electoral, ambos fenómenos producto del deterioro de las lealtades partidarias basadas en un elemento identitario fuerte y construido sobre clivajes sociales relativamente estables (Novaro, 2000). Tales fenómenos se desarrollan con intensidad y particularidades diversas en los diferentes distritos del país, siendo la ciudad de Buenos Aires el caso paradigmático (Cherny y Natanson, 2004).

En lo que hace a la oferta política, asistimos a la desagregación de los partidos políticos, que han perdido la cohesión y el predicamento de antaño. En el distrito se registra la casi total disolución del bipartidismo tradicional, luego de que el justicialismo porteño quedara prácticamente disuelto por luchas internas y magros resultados electorales, y luego de que la Alianza fracasara en el gobierno nacional, dejando a Aníbal Ibarra sin el partido que lo había llevado al gobierno. Tales transformaciones ha incentivando una mayor tendencia hacia el pragmatismo electoral, y hacia un formato representativo personalizado.

En lo que queda de las estructuras partidarias tradicionales se privilegian las candidaturas acordes con la popularidad en la opinión pública, en detrimento del

predicamento en la estructura partidaria (tal es el caso de Nito Artaza en el radicalismo y de Daniel Scioli, años atrás, en el peronismo). Al mismo tiempo, se registra la aparición de fuerzas políticas efímeras estructuradas en torno a personalidades que han adquirido notoriedad en la función pública o en el ejercicio mediático de la oposición (Acción por la República, Nueva Dirigencia, ARI, Recrear, Compromiso para el Cambio, Fuerza Porteña). Esta tendencia hacia el pragmatismo no sólo se verifica a la hora de constituir fuerzas políticas para las elecciones, sino que también se ve modificado el funcionamiento de los partidos en los períodos no electorales, caracterizados por la fluidez de las alianzas en los órganos deliberativos (evidencia de ello es el constante proceso de desagregación y reagrupamiento de los bloques en la Legislatura porteña, donde actualmente los 60 legisladores se dividen en 20 bloques).

Se constituyen así nuevos liderazgos que se definen por su referencia directa a la opinión pública en el espacio massmediático, en términos de una *representación virtual*, sin mediación de las formas organizadas de agregación (partidos, sindicatos, asociaciones). Bajo esta lógica ningún clivaje social se impone por sí mismo como la dimensión principal según la cual dividir a la ciudadanía, sino que tiene relevancia una pluralidad de clivajes que son activados o no por la oferta partidaria, en competencia por la formación de consensos lo suficientemente amplios como para asegurarse un importante caudal electoral a la hora de los comicios (Manin, 1993).

En cuanto al comportamiento ciudadano, se caracteriza por la variabilidad del voto y la expansión del electorado independiente, cuyo sufragio depende cada vez más de decisiones individuales en el curso de las campañas electorales, en función tanto de un pronunciamiento respecto a la gestión de gobierno, como de temas de coyuntura (agenda) y de la opinión sobre la imagen de los candidatos. Este aumento de la autonomía ciudadana respecto de las identidades tradicionales también ha redundado en una relación cambiante con los asuntos públicos, cuyos polos parecen ser el *estallido* –a la manera del “cacerolazo”- y la actitud de espectador o *audiencia* mediática -cuya ilustración es el “estado de la opinión pública” dado por los sondeos-. Se podría entender este proceso en términos del pasaje del *pueblo* (caracterizado por su unidad, unanimidad y una relación bipolar entre el líder y la masa) a la *ciudadanía* (que, si bien es capaz de asociarse y actuar, carece de la unidad y homogeneidad supuesta en otras épocas, y en ocasiones se expresa en forma de “multitud”) (Cheresky, 2001).

El espacio público, lugar central donde se tematizan los problemas coyunturales de forma convincente e influyente (Habermas, 1998) se constituye así en un ámbito massmediático en el cual se decide y se ejecuta la política (Wolton, 1998). El orden simbólico que se reproduce en el campo televisivo se caracteriza por su funcionamiento bajo una lógica del *suceso*, según la cual la realidad es “mostrada” a través una serie de acontecimientos presentados en forma descontextualizada y discontinua, escenificada y espectacular. Dicho manejo de la temporalidad impide una argumentación compleja (volviendo invisibles procesos o estructuras para poner en primer plano a las personas) al mismo tiempo que confiere un efecto de realidad capaz de movilizar al público (Bourdieu, 1997).

En este nuevo espacio público, la ciudad de Buenos Aires presenta una particularidad adicional, producto de su yuxtaposición con el espacio nacional. La agenda, los actores (institucionales y de la sociedad civil) y los medios relevantes en el plano nacional tienen su sede en la ciudad, lo que hace borrosas y confusas las fronteras que delinear uno y otro escenario. La forma oligopólica de los medios (concentrados en tres grandes grupos, Clarín, Telefónica y Canal 9, que lideran los índices de audiencia y circulación tanto a nivel gráfico como radial, pero cuya mayor incidencia está en la televisión), acentúa la proyección nacional del escenario político porteño (al que habría que sumar el conurbano bonaerense), constituyéndose en un vital recurso para la trama asociativa local, incluso para las pequeñas y fugaces formas organizativas, que gozan de una facilidad para intervenir de manera esporádica en el debate público nacional que no poseen las organizaciones del resto de los distritos¹. Dichas intervenciones se suscitan generalmente alrededor de algún tema particular, y cobran la forma del *estallido*: al ser Buenos Aires la sede de los principales medios y de las autoridades nacionales, cualquier acontecimiento que se suscite en la vía pública y que sea presentable en los términos del lenguaje televisivo, inmediatamente pasa a ser un tema de discusión nacional, e influye en la constitución de la agenda de la ciudad.

Esta verdadera transformación del sistema representativo, que se caracteriza por una multidimensionalidad de esferas y temáticas, y por la fragmentación y fluctuación de las

¹ La reciente protesta de los alumnos del normal 9, en reclamo de mejoras edilicias, muestra claramente de qué manera pueden llegar a influir en el debate público formas organizativas débiles y casi rudimentarias.

identidades, pone en primer plano, junto con el carácter “instituyente” de las campañas electorales (que configuran identidades *ad hoc* en el momento de la elección), la cuestión de la elaboración de una agenda política en el espacio público (Wolton, 1998). Podemos pensar la construcción de la agenda política como campo de antagonismos políticos y objeto de articulación hegemónica (Laclau, 1994, 1996). La agenda se presenta así como un conjunto de significantes sobredeterminados y polisémicos que deben ser objeto de un intento contingente de fijación, de literalización, para mantener la imagen de unidad de lo social. Los líderes de popularidad presentarían al electorado una interpretación simplificada de lo social a través de un número reducido de “problemas” identificables a resolver, interpretación que, sin embargo, es vital para poder aprehender (y hacer) lo social, al construir una estructura común de sentido que permita la acción intersubjetiva y evite la dispersión de significados.

En esta pugna hermenéutica alrededor del sentido de la agenda temática se produce, reproduce y transforma la identidad de los actores. Podemos definir a la identidad política como “...el conjunto de prácticas sedimentadas, configuradoras de sentido, que establecen a través de un mismo proceso de diferenciación externa y homogeneización interna, solidaridades estables, capaces de definir, a través de unidades de nominación, orientaciones gregarias de la acción en relación con la definición de asuntos públicos” (Aboy Carlés, 2001, pág. 384). Ésta se construye en forma relacional a partir de un exterior constitutivo que es aprehendido como pura negatividad, como pura amenaza a la subsistencia y realización plena del “nosotros” (Laclau, 1990). De esta manera, el carácter instituyente (político) de los liderazgos de popularidad en este nuevo contexto se ve cristalizado en la capacidad discursiva de instalar una alteridad que constituya la unidad del actor de su enunciación.

La porosa agenda porteña: corrupción y seguridad

En nuestro distrito, la cuestión de la *seguridad* no se había constituido en tema crucial sino hasta este último año². Si atendemos a las campañas electorales desde la

² “La seguridad pública se ha convertido en Argentina en un asunto políticamente relevante y en una cuestión altamente sensible, no por la importancia que la clase política le ha adjudicado sino, más bien, debido al hecho de que el colapso y la crisis de los sistemas de seguridad locales se han convertido en una de las principales preocupaciones colectivas y, por ende, han comenzado a cercenar la legitimidad y la proyección política de numerosos dirigentes y

autonomía porteña, Fernando de la Rúa llegó a la Jefatura de Gobierno como abanderado de la “seriedad” y la “honestidad” frente a la *corrupción* encarnada por el menemismo. De la misma forma, la disputa entre Ibarra y Macri en el 2003 estribaba en torno a la cuestión de la *corrupción* como problema acuciante sobre el que se articulaban los colectivos de identificación (Mauro, 2005).

Por el contrario, la cuestión de la *seguridad* parecía ser un tema exclusivo de la Provincia de Buenos Aires, donde se habían convertido en líderes de popularidad personajes ligados a las fuerzas de seguridad, como el ex carapintada Aldo Rico y el ex comisario Luis Patti. Puede afirmarse que tanto uno como el otro construyeron su popularidad alrededor de este tema, estableciendo una cadena de equivalencias por la cual la “mano dura” frente a la *inseguridad* (entendida exclusivamente en términos de criminalidad) significaba al mismo tiempo transparencia en la gestión y capacidad de mando para llevar adelante una administración eficiente, es decir, un estado fuerte basado en la valentía del líder y no en un gasto público desmedido. Con esta fórmula, que se mostraba eficaz para ubicar a ciertos personajes extrapartidarios en la escena política y adjudicarse intendencias, en 1999 ganó la gobernación el ex vicepresidente Carlos Ruckauf, radicalizando su discurso frente a la delincuencia.

La factibilidad de los argumentos planteados por estos líderes se comprende a partir del tratamiento que le han dado los medios de comunicación a las denominadas “olas” de inseguridad en el conurbano bonaerense. La denominación de “olas” se ajusta a la lógica con la que los medios significan la realidad, en tanto sucesión de acontecimientos, de eventos que cobran una relevancia preponderante sin atender a los procesos más duraderos que le dan visibilidad. Si bien puede rastrearse el aumento de la delictividad a lo largo de la década de los '90 tanto en el conurbano como en la ciudad de Buenos Aires³, es observable al mismo tiempo un aumento desproporcionado de su tratamiento por los medios⁴.

funcionarios gubernamentales”. (Sain, 2005, pág. 68). El comentario parece acertado si se lo restringe al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, donde la cuestión de la seguridad fue planteada “desde abajo”. No parece tan pertinente en el caso del conurbano.

³ En 1992 se registra en la ciudad una tasa de 102 delitos por cada 100 mil habitantes. En 1997, la tasa de delitos aumentó a 474,4; y a 662,7 en 2002 (mientras que en el total del país, la tasa gira en torno a los 300 delitos por cada 100 habitantes). Fuente: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, anuario estadístico 2002.

⁴ En este sentido, estudios realizados por el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, demuestra que el tratamiento dado por los medios a la inseguridad varía con absoluta independencia de la variación de la tasa de delitos registrados. El ejemplo más significativo surge de un análisis del año 2003, cuando el tratamiento de la inseguridad en los medios tiene un importante aumento en el mes de noviembre, período en el que la tasa de

Esta visión define a la *seguridad* en términos de su oponente, la *inseguridad*, que se presenta como equivalente a *criminalidad*⁵, ofreciendo de esta forma una determinada caracterización del “delincuente” como amenaza a la realización plena de un “nosotros”⁶. La distinción principal entre la “gente honesta” y “la delincuencia” no pasa por el apego o desapego a las normas, ya que la lucha contra la delincuencia requiere necesariamente un abandono declarado de las garantías constitucionales (de hecho, tanto Patti como Rico han surgido como personajes populares a partir de su conducta contraria e incluso hostil hacia las instituciones), lo que lleva a plantear como denuncia y crítica hacia ciertos jueces su actitud “garantista”.

La diferencia estribaría entonces por el carácter violento, indigno e inmoral de los delincuentes. Delincuente, individuo peligroso y desviado, no es aquel que transgreda la ley sino solamente aquel que el sistema penal encierre en la cárcel, o señale con algún gesto de ejemplaridad sancionatoria⁷ (Daroqui, 2003). “La delincuencia” se define, de manera simplificada y esquemática, como un grupo homogéneo de individuos sin código, en un doble sentido: por un lado, los delincuentes no conocen moral, cosa que se pone de manifiesto en la violencia extrema con la que tratan a sus víctimas inocentes; pero, al mismo tiempo, se considera a los delincuentes incapaces de cualquier tipo de reflexión e incluso conducta. En este punto se distinguen de la gente decente, que se sacrifica llevando una vida disciplinada para sostener un nivel de vida que los hace dignos.

Frente a esta definición de la realidad, otro discurso pugnaba por una articulación alternativa, que ponía el eje en la cuestión social y en condicionamientos estructurales

delitos sufría una considerable baja respecto de su pico más alto en marzo del mismo año (Centro de Estudios de OP, Universidad de Belgrano, IVSP).

⁵ “En la última década, el aspecto más convocante sobre ‘la seguridad’ ha remitido casi exclusivamente a aquel que la vincula y circunscribe a la cuestión de la criminalidad. Política criminal ha sido casi sinónimo de política de seguridad.” (Daroqui, 2003, pág. 1).

⁶ En este sentido, la cuestión de la inseguridad se define en términos de “defensa social”, por la cual se reafirma la constitución de una identidad netamente política, a través de “...una referencia sistemática a una sociedad que detenta valores, normas e intereses comunes a todos los ciudadanos, una ley penal igual para todos y un Estado como expresión de esa sociedad- con instancias de control social que legitiman su accionar represivo hacia la criminalidad o la desviación criminal entendidas como el mal, como amenaza, reafirmando entonces, esos valores, normas e intereses” (Daroqui, 2003, pág. 3).

⁷ “En la opinión pública y en los medios de comunicación de masa, estos delitos son caracterizados por una regular repartición de papeles de la víctima y del agresor, respectivamente: en los grupos sociales garantizados y ‘respectables’ y en aquellos marginales y ‘peligrosos’, extranjeros, jóvenes, toxico-dependientes, pobres, sin familia, sin trabajo o sin una calificación profesional” (Baratta, 1997).

de tipo socioeconómico, incorporando a la *seguridad* cuestiones que hacen a la provisión de garantías de derechos y de reaseguros sociales a la población⁸. Este intento por ampliar y redefinir la noción de *seguridad* podría entenderse a partir de la distinción entre “seguridad ciudadana”, una seguridad ampliada, y “seguridad urbana”, la seguridad restringida a la criminalidad (Daroqui, 2003). La ampliación de la idea de seguridad señalaba que la delincuencia aumentaba a la par con el aumento de la marginalidad⁹.

Ahora bien, hemos hecho referencia anteriormente a una distinción esquemática entre una agenda porteña estructurada en torno a la *corrupción* y otra bonaerense alrededor de la *seguridad*, diferenciación que no puede sostenerse si atendemos al hecho de que tanto en un escenario como en otro las cuestiones se presentaron de manera cruzada. El citado triunfo de Ruckauf fue relativamente ajustado frente al discurso anticorrupción de Graciela Fernández Meijide, demostrando que los temas de agenda son cuestiones fluctuantes y no circunscriptas a una determinada geografía electoral. Lo mismo en la ciudad, De la Rúa e Ibarra han tratado de mostrar como logros de sus respectivas gestiones ciertos avances en materia de seguridad, y otros actores (Cavallo o Patricia Bullrich) han acentuado su preocupación por el manejo de la inseguridad.

¿Cómo se explica esta porosidad de ambos escenarios? Ello se debe a la especial morfología de los medios de comunicación nacionales ya mencionada, cuyos contenidos son diseñados desde y para el par ciudad de Buenos Aires – conurbano, generando así diversos movimientos. Por un lado, la cuestión de la *corrupción* era en realidad el eco de una problemática claramente nacional (la denuncia hacia el decisionismo y el desapego a las normas institucionales que caracterizaba a la gestión menemista), mientras que la cuestión de la *seguridad* (asociada necesariamente con el conurbano) pasaba cada vez más a tratarse como una cuestión nacional.

⁸ Según Sain, op cit, esta perspectiva “crítica” de la problemática de la seguridad también aplica una reducción y simplificación del problema que la hace parcial y sesgada: “Para estos exponentes, la mejor política de seguridad es aquella que se asienta en la fiscalización del desempeño policial, sin miramientos ni consideración alguna acerca de las problemáticas criminales ni de cómo éstas vulneran los derechos y las libertades ciudadanas”. (Sain, op cit, pág 73).

⁹ “En países como la Argentina la problemática de la seguridad no se dirime mas que en las formas tradicionales de la Defensa Social con el agravante de que parece ser que nos estamos ocupando de otra cosa, de algo que va mas allá de la represión descarnada de una minoría de ofensores que serán signados como los sospechosos de siempre, serán judicializados y seguramente encarcelados. Esta estrategia ha permitido desde hace mas de una década ocultar el verdadero avasallamiento por parte de las políticas neoliberales sobre las ‘otras seguridades’” (Daroqui, 2003. pág 8).

Ambos movimientos se vieron suspendidos en diciembre de 2001, cuando el corte institucional producido por el “cacerolazo” y la debacle económica produjeron una apertura de la agenda política hacia la cuestión de la pobreza y la marginalidad, haciendo factible la discusión en torno a reformas económicas estructurales y situando en primer plano la definición ampliada de *seguridad* que se mencionó anteriormente. Asimismo, la crisis de diciembre fue una de las más claras experiencias de lo que denomináramos *estallido*, en tanto irrupción de un colectivo desagregado de ciudadanos que ejercen, de manera reactiva ante políticas concretas del gobierno (o la falta de ellas), una intervención reguladora, que, no obstante, no pasa del mero corte o veto ni cristaliza en formas asociativas estables.

No obstante, a medida que la situación se “normalizaba”, ambas cuestiones, que permanecieron en un relativo suspenso, volvieron a convertirse en temas de agenda. La *corrupción* era redefinida en el discurso kirchnerista en términos de un “pasado” que amenazaba la reconstrucción nacional, y era también utilizada, como dijimos, en la campaña porteña. La seguridad, por otra parte, pasó a convertirse en una de las banderas del candidato que acumuló la mayor concentración de votos en las presidenciales de 2003 (Carlos Menem), pero no influyó decisivamente en las promesas de campaña del resto de los candidatos. En la ciudad, la cuestión *seguridad* no se cristalizó del todo en la campaña 2003, solamente Patricia Bullrich hizo clara mención a la cuestión, mientras que Macri optó por dejarla en un segundo plano. Sin embargo, diversos hechos¹⁰ generados al año siguiente colocaron a la *seguridad* como un tema principal en la agenda porteña.

El liderazgo de Blumberg y la doble reducción de la inseguridad

Axel Blumberg era un joven estudiante de ingeniería, que fue secuestrado el 17 de marzo del 2004 en Martínez y seis días después asesinado en la localidad de Moreno. Siete días después, su padre, Juan Carlos Blumberg, encabezó una multitudinaria movilización popular frente al Congreso Nacional, reclamando que éste lleve a cabo una

¹⁰ La referencia a “hechos” está justificada desde el momento en que definimos la lógica de los medios de comunicación (principales actores del espacio público) como una lógica del acontecimiento, según la cual se construye un relato que hilvana diferentes fracciones significativas de manera episódica.

serie de reformas legales tendientes a aumentar las penas correspondientes a un conjunto de figuras criminales y a introducir ciertas modificaciones procesales.

Fue una sorpresa el tono ciudadano y la convicción democrática que profesó en su discurso, cuando se identificaba generalmente a la cuestión de la seguridad con un fuerte desapego hacia las garantías constitucionales. Por el contrario, Blumberg identificó al Estado y, consecuentemente, a las autoridades responsables de su administración y gobierno como las instancias legítimas de resolución de la crisis en ciernes (Sain, 2005). Ha formulado apropiadamente que es el Estado, dentro de la legalidad democrática, la vía en cuyo marco la clase dirigente local debería dar cuenta de los cambios reclamados. La movilización de Blumberg aparecía entonces como un reclamo de una ciudadanía madura e independiente hacia un Estado legítimo. Ahora bien, conviene adentrarse en esta construcción para entender las características de esta “ciudadanía” a la que se apela.

En primer lugar, cabe señalar que la novedad de este planteo consiste en una doble reducción de la *inseguridad*, primero a la *criminalidad* (como vimos, articulación presente en el espacio público desde los ‘90), luego a la modalidad de los secuestros extorsivos. De esta forma, el ingeniero constituye una dicotomía entre *la gente y la delincuencia*, dándole a su colectivo de identificación una caracterización adicional, ya que se trata de una mayoría silenciosa¹¹ de individuos no sólo amenazados por el delito, sino también completamente ajenos a la política, en un doble sentido: desprotegidos por un poder político corrupto y alejados de cualquier tipo de participación en formas agregadas de intereses, que son identificados con luchas facciosas perjudiciales para el país.

En este sentido es importante destacar la forma en que se ha construido el carácter de *víctima* de los destinatarios del discurso de Blumberg. No sólo se trata de víctimas de los secuestros, sino que se trata de esa multitud de hombres y mujeres comunes que vienen sufriendo en silencio durante mucho tiempo, soportando sobre sus hombros el peso de una sociedad desarticulada en todas sus aristas. La figura de padre que ostenta

¹¹ El manifiesto de la Cruzada por Axel comienza de la siguiente manera: “No somos de Izquierda o Derecha, no tenemos Color político o partidario, porque somos la Mayoría Silenciosa de los Argentinos que quiere una Argentina distinta”.

Blumberg (capaz de sobreponerse al dolor más grande¹² para levantar una bandera común y expresar “lo que la gente necesita”) le agrega un plus de legitimidad al definir una imagen que interpela al público desde el llano, en tanto *gente*, por oposición al lugar “desde arriba” de los políticos, identificados con la persecución de intereses particulares y desconectados de los verdaderos problemas del ciudadano común¹³.

En este sentido, la oposición entre la “mayoría silenciosa” que reclama y una clase política responsable de la avanzada de esa alteridad radical identificada como “los delincuentes” se hace factible no sólo desde una retórica de “mano dura”, sino también desde de un discurso democrático promoción de la participación activa de los ciudadanos, no ya en organizaciones o partidos, sino en tanto individuos convocados por el Estado para intervenir en programas de prevención y de participación. En materia de seguridad, tanto formadores de opinión como juristas y políticos proponen visualizar la cuestión de la criminalidad como el problema a resolver ya no sólo por el Estado sino también por parte de los que son considerados ciudadanos, potenciales víctimas. La participación ciudadana ha sido convocada para gestionar en los barrios, en las calles, la ‘cuestión seguridad’ en términos de resguardo de actos delictuales y de las incivildades de aquellos representantes de la “mala vida”, que condensan todas las representaciones de ‘grupos amenazantes’ o ‘grupos de riesgo’ que ponen en riesgo a los “buenos vecinos” (Daroqui, 2005)¹⁴.

Así como los ciudadanos son convocados por el Estado en programas de seguridad, también son convocados frente a esa otra alteridad, los políticos, en programas tendientes a reforzar la actividad de control ciudadano (presupuesto participativo, referéndum, consulta popular, hasta internas abiertas). Es este piso individualista común

¹² “Yo hice todo lo que me decían, brindé toda la ayuda. Y perdí a mi hijo”, dice en una charla con Clarín, con un dolor irreplicable en cada palabra. (...) Enseguida, levanta la voz con una indignación única. ‘Acá las leyes son muy permisivas, se premia a los delincuentes’, opina. ‘La Policía no tiene presupuesto, o lo gasta en otra cosa. Esto es una cosa de locos, están secuestrando gente por todos lados. Esto es gravísimo.’” (Clarín, 24/03/04).

¹³ Sumado a esta apelación a los valores familiares, como dispositivo para suscitar una identificación a-política (incluso pre-política), Blumberg apela a la religiosidad como lazo externo a los partidismos, para hablar por la gente sin hacer política. Este rol preponderante de los medios también contribuyó a darle al movimiento el perfil a-político que se pretendía, al permitirle apelar a la ciudadanía en general, como público, sin necesidad de recurrir a la adhesión de colectivos organizados. En este sentido, la televisión se constituye como un lazo que une a aquellos que están “suelos”, a ese colectivo plural y fragmentario que es la gente.

¹⁴ En el mismo sentido se manifiesta Sain: “Ciertas alternativas... reivindican sin más la participación de la comunidad en los asuntos locales de la seguridad como la panacea de un nuevo paradigma democrático de la seguridad. Postulan que a través de la intervención comunitaria en el gobierno de la seguridad y en el control de la policía será posible reformular las deficiencias del sistema de seguridad vigente y nada señalan cuando en ciertas experiencias comunitarias se postulan y aprueban lineamientos propios del paradigma autoritario, como se ha observado recurrentemente en Argentina. (Sain, op cit, pág 73).

entre los programas de prevención y los programas de control el que permite a Blumberg peticionar ante las autoridades no sólo por reformas en materia de seguridad, sino también adentrarse en la reforma política.

Inseguridad y protestas: el Código Contravencional y las incivildades

Desde que se implementó la autonomía porteña, la ciudad ha buscado darse una legislación adecuada a los tiempos que corren para regular las infracciones menores. El primer intento fue la sanción del Código de Convivencia Urbana, aprobado en 1998, que reemplazó a los edictos policiales, generando una gran polémica en la opinión pública, a raíz del tratamiento “permisivo” de ciertas contravenciones (incivildades). Con este antecedente, la intención de reformar dicho Código se planteaba, desde el comienzo, como una empresa conflictiva.

La instalación del tema en la agenda política de la ciudad estuvo a cargo del macrismo, que buscaba reemplazar directamente el Código vigente por uno nuevo. Este planteo avivó la polémica tanto dentro de la Legislatura como fuera de ella. En la Legislatura porteña, la oposición se marcó entre un polo de legisladores prorreforma (entre los que se encontraban el bloque macrista, la bancada de Recrear y el Partido de la Ciudad), y un polo opositor al proyecto del macrismo, integrado por la mayoría de los bloques que respaldaban a Ibarra (autodefinido como “interbloque progresista”). Ciertas cuestiones despertaron muestras de rechazo por parte de organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraban agrupaciones defensoras de los derechos humanos, asambleas barriales, grupos piqueteros, agrupaciones de travestis y prostitutas, y asociaciones de vendedores ambulantes.

El primer momento por el que atravesó el accidentado trámite de reforma se caracteriza por la voluntad del gobierno de Aníbal Ibarra, acompañado por algunos legisladores oficialistas, de enfrentar el proyecto de la oposición macrista. Para ello, el gobierno convocó a audiencias públicas, de carácter puramente consultivo, que no tenían carácter vinculante y ni siquiera sus impulsores pensaban llegar a instancias de conclusión, pero cuyo objetivo era desactivar mediante la discusión abierta la iniciativa

de la oposición, generando un involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil que apuntaría a dotar de cierta legitimidad pública al proyecto oficial.

La discusión pública idealizada que imaginaron los impulsores de las audiencias nunca se concretó, y en cambio se creó una escena crispada, en la que algunos grupos de la sociedad civil (asambleas barriales, representantes de las minorías sexuales, prostitutas, piqueteros y asociaciones de vendedores ambulantes), en combinación con algunos partidos minoritarios de izquierda, lograron atraer la atención de los canales de televisión a través de la espectacularidad del debate, primero en el ámbito previsto institucionalmente (el Centro Cultural San Martín) y después en la calle, en los alrededores de la Legislatura. El punto máximo ocurrió el 15 de julio, con los incidentes fuera de la Legislatura y los debates en el recinto, que configuraron una situación con todos los elementos necesarios para una amplia cobertura televisiva: espectacularidad, posibilidad de transmitir en vivo desde diferentes lugares, dirigentes políticos con un alto nivel de conocimiento público decididos a aclarar sus posiciones ante las cámaras.

Cabe destacar que la violenta protesta frente a la Legislatura se producía en un contexto en el que varios actores rechazaban la política de seguridad del gobierno kirchnerista, y especialmente su “debilidad” frente a la protesta piquetera. La marcha de Blumberg y la toma de la comisaría 24 de La Boca por parte un grupo de piqueteros encabezados por Luis D'Elia, aliado del Gobierno, en reclamo por el crimen de un dirigente social, habían reforzado considerablemente estas voces de disidencia, condensando ambas cuestiones (la de la prevención de delitos y la de la actitud frente a las protestas) bajo el rótulo de “políticas de seguridad”. Y los incidentes en la Legislatura serían definitorios.

El clima de descontento frente a la “política de seguridad del gobierno” fue potenciado de tal forma por la espectacularidad de los incidentes, que no sólo habilitó a la oposición a posicionarse (cosa que hicieron Carrió, López Murphy y Macri) sino que llevó incluso a un giro de los propios aliados de Kirchner. Ibarra polemizó con el gobierno nacional por el manejo del conflicto en un debate que no sólo aludió a las responsabilidades de cada uno, sino que también refirió a puntos de vista diferentes en torno a la cuestión de la inseguridad. El saldo político más nítido fue la primera crisis de Gabinete de Néstor Kirchner. Dos días después de los episodios se conoció la renuncia

del titular de la Policía Federal, Eduardo Pardos, del secretario de Seguridad, Roberto Quantin, y del ministro de Justicia, Gustavo Béliz, a raíz de las diferencias de criterio con el presidente en torno al manejo del dispositivo de seguridad para la sesión siguiente de la Legislatura, prevista para el 22 de julio, donde se continuaría tratando el proyecto de reforma.

El tema no se limitó al cambio de nombres en el seno del gabinete sino que tuvo consecuencias más perdurables en la modificación de la política de seguridad oficial y el modo de encarar la protesta callejera y la ocupación del espacio público de la Ciudad. El gobierno decidió colocar unos mil efectivos de la policía, desarmados, para custodiar la sesión del 22, y luego fue extendiendo esta estrategia a otros casos, donde la decisión de no intervenir exhibida el 15 de julio cambió por una “intervención blanda”, que buscó un equilibrio complejo entre los excesos represivos y la criticada pasividad. Los cambios se confirmarán después, con el paso del manejo de la seguridad del Ministerio de Justicia al de Interior.

Cromagnon, entre la tragedia y la masacre

El 30 de diciembre, un incendio en el local República de Cromagnon, en el barrio de Balvanera, durante un recital del grupo Callejeros, se cobró 193 víctimas fatales y más de 700 heridos. La magnitud del siniestro generó diversos movimientos en el escenario político porteño bajo la forma repentina del *estallido*, afectando los liderazgos locales, los dispositivos institucionales y dejando una herida abierta en la opinión pública.

Con motivo de la investigación judicial, los familiares de las víctimas se constituyeron tres grupos de querellantes. De ellos, la mayor divergencia se centra en dos grupos específicos. El primero, autodenominado “Que no se repita”, está liderado por el abogado José Iglesias, padre de Pedro, una de las víctimas del incendio. Podría decirse que este grupo tuvo desde el principio la referencia de la Cruzada por Axel y de la figura de Juan Carlos Blumberg¹⁵, tratando de darle al reclamo un tono ciudadano y

¹⁵ “La única decisión racional que tomé en estos días fue canalizar mi dolor en una batalla institucional. Todos los responsables de la muerte de mi hijo se han ganado un enemigo. A todos, desde Kirchner para abajo, quiero declararles que les ha nacido un nuevo Blumberg. Desde ya les aviso: los quiero presos” (Clarín, 3/1/05).

apolítico, con el objetivo de maximizar la adhesión a la causa de los familiares e influir de esta forma en la causa judicial y en el gobierno local. Por otro lado, está el grupo autodenominado “CoFaCrom”, que presenta una referencia más cercana a los partidos de izquierda, y que desde el principio cargó todas sus tintas contra el Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y privilegió una forma de intervención en el debate a partir de una ocupación de los espacios públicos menos masiva y más directa, incluso probablemente más violenta¹⁶.

El segundo grupo fue proclive a señalar a la denominada por los medios “tragedia de Cromagnon” como “masacre”, ensayando una articulación que le restara a Aníbal Ibarra argumentos para diluir la responsabilidad que le atribuyen en el incidente y tildarlo así de “asesino”. El grupo liderado por Iglesias no se diferencia en este sentido, ya que una de sus consignas de cabecera es precisamente que “la corrupción mata”, aludiendo claramente a la responsabilidad del Gobierno porteño en el incendio.

El cuestionamiento fundamental a las autoridades pasó por la falta de controles y el manejo de las habilitaciones, cuya gestión deficiente permitió que un local de características riesgosas para la seguridad de los asistentes funcionara con total normalidad. Nuevamente, la cuestión crucial pasaba por el manejo del Estado frente a la seguridad de los ciudadanos, entendiendo la *inseguridad* como la desprotección frente a la falta de cuidado de los particulares (de *otros* particulares, entendidos como asesinos). La crítica a la ineficiencia del gobierno porteño, combinada con la suposición de coimas a los organismos de control, hizo factible la articulación entre la *inseguridad* y la *corrupción*. El incumplimiento de la protección de los ciudadanos por parte del Estado es entendido como síntoma de una estafa de los políticos, que prometen para hacerse con el cargo y luego no cumplen con una gestión eficiente.

Al unir la corrupción con la figura de Aníbal Ibarra se reproducen algunos argumentos de Macri, según los cuales ser corrupto significa ser incapaz o ineficiente en

¹⁶ Sobran prueba de las divergencias entre ambos grupos. Basta con mencionar el conflicto por la presencia de Blumberg en la marcha del 3 de enero, que fue convocado por Iglesias y luego repudiado por otros familiares, y los diversos incidentes en varias marchas posteriores, cuando la cabecera de la columna marchaba con velas y en la retaguardia se producían disturbios con las fuerzas de seguridad. El último polo de conflicto se dio en la marcha del 30 de mayo, en torno a la consigna de la bandera principal, que hasta ese día rezaba simplemente “Justicia” y luego quiso ser reemplazada por “Cárcel a Ibarra, Chabán y todos los responsables”, llegando la situación hasta la violencia física entre los asistentes. En esa última marcha, por primera vez Iglesias no estuvo presente.

la gestión de lo público . En la campaña 2003, Macri había apostado a una articulación entre las nociones de corrupción, ineficiencia y estafa , a las que, luego de Blumberg, agregó con mayor énfasis la cuestión de la *seguridad*. Este tratamiento de la corrupción en el discurso de los familiares de las víctimas habilitó a Macri a atacar a Ibarra con todas sus fuerzas, que desplegó de una manera tan evidente que generó una consecuencia no deseada : rehabilitar la amenaza proveniente del *pasado* que Ibarra denunciaba en la campaña . Acentuar la debilidad del Jefe de Gobierno terminó por darle su mejor arma: Ibarra solamente debía invertir los términos de la denuncia que lo señalaba como principal responsable de la tragedia para sugerir un intento de “golpe institucional” y recurrir una vez más al fantasma que lo colocaba al frente (o por lo menos en el centro) del arco progresista de la ciudad que defiende los bienes públicos de un pasado privatista.

Ahora bien, dentro de este panorama, en el que tanto oficialismo como oposición quedaron deslegitimados, uno acusado de ineficiente, otro de advenedizo, ambos de corruptos, cabe preguntarse en qué posición quedaron las agrupaciones de padres de las víctimas. Como decíamos, ambos grupos coincidían en su oposición a Ibarra, pero al mismo tiempo despreciaban el oportunismo de Macri, mientras que, fuera de estas actitudes, disentían en todo, generando marchas y contramarchas en todas sus intervenciones públicas, siempre marcadas por la indignación.. El carácter cada vez más difuso y contradictorio de la posición y la tarea de las agrupaciones de padres demostraba una incapacidad por asignar un sentido a la catástrofe (a la que nunca se la pudo denominar con certeza ni como tragedia, ni como masacre). Sucede que marchar con Blumberg¹⁷ y vituperarlo al mismo tiempo, marchar con los partidos de izquierda, y atacar a Estela de Carlotto a huevazos y habilitar la crítica macrista reproduciendo algunos de sus argumentos, constituía una paradoja irresoluble.

¹⁷ Apenas fue reconocido, el padre de Axel —el chico que fue asesinado por sus secuestradores— empezó a ser insultado por un grupo de jóvenes. "Blumberg, nazi", dicen que le gritaron y "Rajá de acá". También lo escupieron. El dirigente tuvo que refugiarse en un hotel ubicado en Rivadavia y La Rioja. Un grupo de policías de la Federal armó un cordón frente al edificio para protegerlo. Pero no pudieron impedir que volaran piedras y botellas contra la fachada. Finalmente, escapó por una puerta trasera. Después fue el mismo Blumberg quien contó los hechos. Dijo que había sido invitado por algunos padres y que hubo gente que lo "empezó a insultar de una forma agresiva". Clarín, 04/01/05. En medio del fervor, una decena de jóvenes agredió a botellazos y a salvazos a Juan Carlos Blumberg, quien intentaba participar de la marcha. Ello lo obligó a refugiarse en un hotel. Ayer, Blumberg expresó su solidaridad con las víctimas por medio de una carta en la que invita a los argentinos a que defendamos "nuestra vida, la de nuestros hijos, exigiendo los cambios necesarios para que no haya más muertes injustas, producto de la delincuencia de cualquier tipo". La Nación, 4/1.

Las fallas que impidieron que esta pugna hermenéutica por significar el caso Cromagnon, son ilustrativas de la forma que asume el espacio público. Más allá de la articulación *inseguridad – corrupción* que separa al “nosotros” victimizado de “los otros” corruptos, el movimiento generado no encontró una forma de autodenominarse y ubicarse en un presente, dentro de una cadena equivalencial con hechos anteriores y con demandas de otro tipo, no se asignó ninguna otra tarea que no pase por el castigo a los culpables, a veces perseguido de manera tan directa que podía ser tildado de venganza, restándole así, no la comprensión (que ya la poseen por su propio sufrimiento) sino la palabra autorizada. La diferencia con Blumberg es muy clara: la Cruzada por Axel suscita adhesiones y rechazos, mientras que las marchas de los familiares de víctimas de Cromagnon suscita más bien una suspensión del debate, ya que frente al dolor de estos padres no hay réplica (algo parecido le pasaba a Blumberg en la primera marcha), pero esta incontrastabilidad del dolor no implica una adhesión inmediata a su causa, las expresiones de furia de estos padres no son argumentos, por ello vale contenerlos y no responderles. Por ello, lo de Cromagnon sigue siendo aún hoy una “tragedia” y no una “masacre”.

Comentarios Finales

Hemos visto, a través de los diversos casos y de una contextualización de ellos, cómo la cuestión de la *seguridad* se convirtió en un tema acuciante de la agenda política porteña, influyendo en las políticas públicas, en los debates de los medios y en la constitución de actores de la sociedad civil. En los tres casos, la cuestión de la *seguridad* toma la forma de un reclamo de protección de los ciudadanos hacia el Estado, frente a un *otro* radical.

A lo largo de los ‘90, hemos corroborado que en la retórica de la inseguridad ese *otro* era “la delincuencia”, con Blumberg esa articulación se mantiene, con el agregado de que el lugar privilegiado de *los delincuentes* lo ocupaban los culpables de una particular “ola” de criminalidad: los secuestros extorsivos, configurando así un determinado colectivo de víctimas: “los secuestrables”, pensando a éstos como un

conjunto homogéneo de víctimas individuales y ajenas a una participación política estable que vaya más allá del sufragio.

Por otra parte, la respuesta a las manifestaciones frente a la Legislatura dibujó otra frontera, y contrapuso a los ciudadanos frente a los “piqueteros” (aunque esta categoría integra en este caso a un grupo heterogéneo de “otros” marginales: travestis, prostitutas, etc.), en el reclamo al gobierno nacional de custodiar los espacios públicos, pensando a “los ciudadanos” como una audiencia no conflictiva.

Por último, el caso Cromagnon definió otro clivaje también atravesado por la *seguridad*, esta vez oponiendo a los ciudadanos frente a una clase de empresarios corrupta e inescrupulosa, y ante la paradoja de reclamarle a un Estado también corrupto e ineficiente, lo que dejaba a “los ciudadanos” en la tensión entre su carácter particular, en tanto actor de la sociedad civil diferenciada del ámbito de las decisiones políticas (el Estado) y su capacidad disruptiva producto de la desconfianza hacia ese mismo Estado corrupto.

En los tres casos, entonces, queda claro el carácter instituyente de la agenda política, como un conjunto de problemas multiformes, objetos de una pugna por significar el presente. En todos los casos nos encontramos con la doble necesidad de relatar *quiénes* somos “nosotros” (lo que implica necesariamente plantear quiénes nos niegan) y *dónde* estamos ubicados, cuáles son las coordenadas espacio-temporales que constituyen nuestro lugar histórico y le dan un sentido al presente.

Todo eso no se juega en otro lugar que en el espacio público, pero bajo la formas de visibilidad de los medios masivos de comunicación, es decir, a través de la producción de acontecimientos. En este sentido, la forma recurrente del estallido se presentó como una escenificación de las demandas, en algunos casos trayendo imágenes del mundo de lo privado (el dolor de padres frente a la pérdida de sus hijos) como argumentos en el debate público. Al mismo tiempo, también se hizo necesario, en el caso de Cromagnon, centralizar la reflexión sobre la catástrofe en las personas responsables y no en las condiciones estructurales, cerrando el debate a una alternativa entre dos líderes políticos igualmente vituperados, dejando flotante una sensación de impotencia e impunidad que trasciende a la indignación de la calle.

Bibliografía

- Aboy Carlés, G. 2001b “El ágora turbia: reflexiones sobre populismo y ciudadanía en la Argentina” en Cheresky, I -Pousadela, I (comp.) *Política e Instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas* (Buenos Aires: Paidós).
- Arfuch, L. 2005 “Afectos y lazo social”, ponencia presentada en el V Congreso de la Asociación Argentina de Semiótica.
- Baratta, A. (1997) “Política criminal: entre política de seguridad y política social”, en Elías Carranza (coord.) *Delito y Seguridad de los habitantes*. México: Siglo XXI.
- Bourdieu, P. 1997 *Sobre la televisión*, Anagrama, Barcelona.
- Centro de Estudios de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, Actualización IVSP, 2000-2002, 2003 y primer semestre de 2004.
- Cheresky, I. 2005 *Ciudadanía y Sociedad Civil en la Argentina renaciente*, mimeo.
- Cheresky, I - Pousadela, I. (comp.) 2004 *El voto liberado* (Buenos Aires: Paidós).
- Cheresky, I - Pousadela, I (comp.) 2001 *Política e Instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas* (Buenos Aires: Paidós).
- Cherny, N. – Natanson, J. 2001 “Personalismo, localismo y transversalidad: un análisis de las elecciones locales de 2003 en la ciudad de Buenos Aires” en Cheresky, I y Pousadela, I. 2004 *El voto liberado* (Buenos Aires: Paidós).
- Daroqui, A. (2003) “Las seguridades perdidas” en Revista *Argumentos*, N° 2, mayo 2003.
- Ferry, J.M. – Wolton, D. 1998 *El nuevo espacio público* (Barcelona: Gedisa).
- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Anuario estadístico 2002.
- Guagnini, Lucas 2005 *Blumberg. En el nombre del hijo* (Buenos Aires: Sudamericana).
- Habermas, J. 1998 *Facticidad y validez* (Madrid: Trotta).
- Laclau, E. 1990 Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo (Buenos Aires: Nueva Visión).
- Laclau, E. 1994 (1993), “Poder y representación” en *Revista Sociedad* (Buenos Aires) N° 4.
- Laclau, E. 1996 *Emancipación y Diferencia* (Buenos Aires: Ariel).
- Manin, B. 1993 “Metamorfosis de la representación”, en Mario do Santos (coord.) *¿Qué queda de la representación política?* (Caracas: Nueva Sociedad)
- Mauro, S. 2005 “La campaña electoral por la Jefatura de Gobierno de Buenos Aires: estrategias políticas e inteligibilidad de la agenda”, en *Revista Argentina de Sociología* (en prensa).
- Novaro, M. 2000 *Representación y Liderazgo en las democracias contemporáneas* (Buenos Aires: Homo Sapiens).
- Sain, Marcelo Fabián 2005 “La seguridad pública en Argentina” en Santiago Escobar, *Seguridad Ciudadana. Concepciones y políticas* (Caracas: Nueva Sociedad - Friedrich Ebert Stiftung).
- Verón, E. 1987 “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en *El discurso político. Lenguaje y acontecimientos* (Hachette: Buenos Aires).
- Wortman, Ana 2005 “Una tragedia argentina más, ahora los jóvenes y niños de la República de Cromagnón”, en Revista *Argumentos*, N° 5.